



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 1**

Avda Pedro San Martín S/N

Santander

Teléfono: 942346969

Fax: 942322491

Modelo: C1920

Proc.: **PROCEDIMIENTO**

**ABREVIADO**

Nº: **0000040/2016**

NiG: 3907941220150002813

Resolución: Sentencia 000559/2016

Procedimiento Abreviado 0000972/2015 - 00

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Santoña

Intervención:	Interviniente:	Procurador:
Acusado		MARIA ADELA GARCIA GUILLEN

**SENTENCIA Nº 000559/2016**

Ilmos. Sres. Magistrados

Doña Paz Aldecoa Álvarez Santullano.

Doña María Rivas Díaz de Antoñana.

Don Ernesto Sagüillo Tejerina.

=====

En la Ciudad de Santander, a veintinueve de  
diciembre de dos mil dieciséis.

Este Tribunal ha visto en Juicio Oral y Público la  
presente causa seguida por el Procedimiento Abreviado con  
el núm. 972 de 2015 del Juzgado de Instrucción núm. Uno  
de Santoña, Rollo de Sala núm. 40 de 2016 por un presunto  
delito contra la salud pública de sustancias que causan  
grave daño a la salud contra ~~XXXX~~  
mayor de edad, sin antecedentes penales, en libertad  
provisional por esta causa y cuyo estado de solvencia no  
consta, quien ha sido y representado por la Procuradora  
Sra. García Guillén y debidamente defendido por Letrado.

Ha sido parte acusadora el Ministerio Fiscal.



Es ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrado doña María Rivas Díaz de Antoñana, quien expresa el parecer de la Sala.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO: La presente causa se inició por el Juzgado de Instrucción núm. Uno de Santoña en virtud de atestado remitido por la Guardia Civil, por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra la salud pública. Tras practicar el instructor las diligencias de investigación que consideró necesarias, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis acordó seguir el procedimiento abreviado, y tras evacuar el Ministerio Fiscal su acusación, por auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis se acordó la apertura de juicio oral contra el ahora acusado. Evacuado por la defensa de éste su escrito de calificación provisional, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, en que tuvieron entrada el pasado día ocho de agosto de dos mil dieciséis y, tras su señalamiento, se ha celebrado la vista el día trece de diciembre en que quedó el juicio concluso para sentencia.

SEGUNDO: El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos legalmente de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud previsto y



penado en los artículos 368.1º, 369.7 y 374 del Código Penal, y reputando autor responsable al acusado, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal solicitó se le impusiera la pena seis años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6.415 euros. Asimismo abonará las costas procesales.

TERCERO: La defensas del acusado, en igual trámite, solicitó su libre absolución. Con carácter subsidiario interesó se aprecien las atenuantes de toxicomanía, reparación del daño y dilaciones indebidas.

#### **HECHOS PROBADOS**

El acusado , mayor de edad y sin antecedentes penales, interno en el centro penitenciario de el Dueso cumpliendo condena por delito de robo, el día 18 de junio de dos mil quince al regresar de un permiso penitenciario fue sorprendido en el control de entrada portando 64 papelines de cocaína con un peso de 55.61 gramos del 25% y un trozo de cannabis con un peso de 4,99 gramos que llevaba oculto en una cápsula introducida en su ano.

El acusado / pretendía la difusión de la droga intervenida entre los internos del centro



penitenciario. El valor de la droga que se le intervino hubiera alcanzado en el mercado ilícito 3.207,58 euros.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Como es visto, este tribunal, tras valorar en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no puede por menos que declarar probados los hechos anteriormente expuestos.

El acusado ~~AN~~ reconoció la posesión de la cocaína y el cannabis que portaba cuando, tras disfrutar de un permiso penitenciario de salida, se reintegraba al centro penitenciario de El Dueso, en el que cumplía pena por un delito de robo. La pericial de la técnico farmacéutica junto con el pesaje y análisis de las sustancias intervenidas acreditan que era cocaína con un peso de 55.61 gramos del 25% y, asimismo, cannabis con un peso de 4,99 gramos. Por todo lo expuesto el elemento objetivo del delito contra la salud pública, la posesión de la sustancia estupefaciente, se ha probado.

En cuanto al elemento subjetivo o el ánimo de traficar con la droga incautada, teniendo en cuenta la variedad de sustancias, su distribución en papelines independientes, su condición de no consumidor nos lleva a afirmar que tenía la intención de destinar la droga intervenida a su distribución en el Centro Penitenciario



en que se encontraba recluso, único destino posible pues no era para satisfacer sus necesidades de consumo.

El acusado afirma que parte de la droga era para su consumo y el resto para un consumo compartido para otros internos, insistiendo en que consume desde los 16 años. Pues bien de ser cierto el consumo de drogas dicha circunstancia era muy fácil de probar mediante análisis de sangre, de orina o de un mechón de pelo, incluso con el sometimiento previo a tratamiento de desintoxicación. Con carácter previo a la celebración del juicio se acordó, a petición de la defensa, fuese reconocido por el médico forense a lo que el acusado se negó, y lo único que se aporta es un informe médico del centro penitenciario que acredita que se le prescribieron distintos fármacos desde su ingreso en el centro a causa de un trastorno adaptativo e insomnio, no habiendo solicitado ni recibido tratamiento de desintoxicación en el centro penitenciario como tampoco en Pedrosa , según documental obrante en la causa a petición de la defensa. Tal y como declaró el director del Centro Penitenciario los tratamientos son voluntarios y los hace un psicólogo, así como que la prescripción de medicinas por el médico obedece a otros motivos médicos. Pese a lo alegado por la defensa tampoco consta que en sentencia se le hubiese reconocido la atenuante de toxicomanía, ni que hubiese resultado sancionado por consumo tras el disfrute de un permiso penitenciario, lo que era bien fácil de



acreditar. Ante esta situación no puede construirse la tesis propuesta por el acusado en relación a su ánimo respecto de la droga que portaba ayuna de toda prueba, no hay auto consumo ni consumo compartido, siendo el único destino posible su distribución a terceras personas en el interior del Centro Penitenciario en el que cumplía condena.

SEGUNDO: Los hechos declarados probados en esta resolución son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud del artículo 368 párrafo 1º, no siendo de aplicación el tipo agravado del artículo 369.7 del C. P, pues el riesgo fue eliminado por la intervención de los funcionarios que hizo imposible que la droga llegara a sus destinatarios, no existiendo riesgo real de que se difunda entre los internos del centro penitenciario (STS 81/2014, de 13 de febrero, 2067 / 2015, de 11 de mayo), téngase en cuenta que la droga no llegó a introducirse en el centro penitenciario por cuanto el funcionario que declaró como testigo ya en el primer control que se le efectúo para poder entrar al centro penitenciario hizo imposible que la droga se difundiera en el centro penitenciario.

TERCERO: No se ha probado que el acusado fuera consumidor de alguna sustancia estupefaciente, tal y como se ha razonado en el fundamento de derecho anterior, por



lo que no concurre la atenuante de toxicomanía invocada. Tampoco concurre la atenuante de dilaciones indebidas, téngase en cuenta que los hechos enjuiciados se produjeron el 18 de junio de dos mil quince, las diligencias se incoaron el 13 de agosto de dos mil quince y se dictó auto de apertura de juicio oral el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis y antes de que transcurriera un año desde el inicio de las diligencias se recibieron las actuaciones en esta Audiencia Provincial, el 8 de agosto de dos mil dieciséis en la que cuatro meses después se ha celebrado el juicio oral. Tampoco cabe apreciar la atenuante de reparación del daño pues la entrega de la droga por parte del acusado al Jefe de Servicio del Centro Penitenciaria no fue espontánea ni voluntaria sino que, tal y como declaró el funcionario en el juicio, cuando no pasa el primer control de entrada al centro penitenciario y se le va a practicar un cacheo integral, pues de nerviosismo y de prisas para pasar el primer control le infundió sospechas al funcionario, y siendo inevitable el hallazgo de la droga pues se le iba a practicar un cacheo personal de la droga el acusado se derrumba, llora y la entrega.

CUARTO: En cuanto a la pena, no aplicándose el tipo agravado sino el básico, teniendo en cuenta el escenario de comisión, la variedad de sustancias intervenidas y su cuantía, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se estima adecuada y



proporcionada la imposición de una pena de prisión de 3 años y seis meses, multa de 3.207,58 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de 15 días en caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el comiso de las sustancias intervenidas.

QUINTO: En aplicación de lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas deben imponerse al condenado.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey;

### **F A L L A M O S**

Que debemos condenar a  
como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES DE PRISION, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3.207,58 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de 15 días en caso





de impago, así como el comiso y destino legal de la droga intervenida. Se le imponen al condenado las costas procesales.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación que deberá ser resuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá interponerse en la forma y plazos previstos en los artículos 856 y siguientes de la L.E.Criminal.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.